Toluca, Estado de México,

V I S T O, para resolver el expediente número **DCI/D/08/2006**, relativo al procedimiento administrativo instruido al **LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA**, en su carácter de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, y: - - - - -

R E S U L T A N D O:

I.- Por auto relativo, con motivo de la denuncia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil cinco suscrita por el ***** , presentada ante la Dirección de la Contraloría Interna el día tres de octubre del mismo año y resultado de la visita de supervisión practicada al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, por el Magistrado ***** , integrante del Consejo de la Judicatura el día ocho de noviembre de dos mil cinco; con fundamento en los artículos 1, 3, 4 fracciones III y IV, 21 fracción VII, 22 fracción II del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Estado de México, 118 Fracciones I y II y 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, se formó este expediente, acordando el C. Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, ***** , turnarlo a la **LICENCIADA** ***** , Jueza integrante del propio Consejo, para substanciar el procedimiento administrativo en contra del **LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA**, en su carácter de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México; haciéndose del conocimiento de la Dirección de la Contraloría Interna, se solicitó el informe respectivo al precitado servidor judicial, mismo que rindió en su oportunidad,

señalándose día y hora para que tuviera verificativo la audiencia que prevé el artículo 119 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, la que tuvo verificativo a las dieciocho horas del día veintiocho de abril del año dos mil seis; quedando los autos para emitir la opinión correspondiente, y: - - - - -

C O N S I D E R A N D O:

I.- Que de conformidad con el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la Entidad, este Cuerpo Colegiado es competente para conocer y resolver este asunto. - - - -

II.- Que la naturaleza del procedimiento administrativo consiste en verificar si existen actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México, que constituyan faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos. - - - - -

III.- La denuncia de fecha tres de octubre del año dos mil cinco, se hace consistir substancialmente en que con motivo de un percance automovilístico el *****, el día veinticuatro de agosto de dos mil cinco, en la causa número *****, compareció ante el LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, a fin de rendir su declaración preparatoria por haber sido consignado única y exclusivamente por el delito de lesiones cometido en agravio de las ofendidas que menciona, y hecho que fue, para garantizar lo establecido por el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, se le fijó para la fracción I, la cantidad de \$111,337.89 (ciento once mil trescientos treinta y siete pesos 89/100 M.N.), en efectivo, que se divide para cada una de las ofendidas: por lo que hace a *****, \$91,337.89 (noventa y un mil

trescientos treinta y siete pesos 89/100 M.N.); por *****\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), y por *****\$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.); para la fracción II del artículo que invoca se fijó la cantidad de \$ 2,643.00 (dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100. M.N.) en cualquiera de sus formas y para la fracción III la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) en cualquiera de sus formas; cantidad que a pesar de su crítica situación económica, después de conseguirla prestada, la exhibió en el Juzgado, habiéndosele dado el recibo correspondiente

Que según consta de la causa número 107/05, el día veinticinco de agosto de dos mil cinco, fue puesto a disposición del Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, el señor ***** , como probable responsable de los delitos de lesiones y daño en los bienes, que era el conductor que le causó las lesiones que presenta y los daños a su vehículo, así como a los demás lesionados de nombres ***** y ***** , a quién el Juez inexplicablemente, por los delitos de lesiones y daño en los bienes, por auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil cinco, para garantizar lo establecido por el numeral 319 del Código de Procedimientos Penales, por lo que hace a la fracción I, le fija la cantidad de \$73,168.94 (setenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos 94/100 M.N.) en efectivo; por lo que se refiere a la fracción II la cantidad de \$ 2,643.00 (dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.); y para la fracción III la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) en cualquiera de sus formas, cantidades que le otorgó el señor ***** , en efectivo mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de dos mil cinco, a través del defensor oficial adscrito ***** , sin que el juzgador haya fundado ni motivado su decisión para imponerle a ***** la caución de referencia, ya que en el auto relativo en ningún momento refiere los motivos o

razones que estimó pertinentes para fijar dicha cantidad y ni siquiera efectuó la división de cantidades para garantizar el monto de la reparación del daño a las lesiones de mérito como lo efectuó al fijarle la caución que se le aplicó ni tomó en consideración que no existen pruebas específicas en autos para acreditar la reparación en comento, ya que tanto él como otra de las personas que resultaron lesionadas no habían acreditado los gastos que erogaron con motivo de su atención médica y los documentos que acompañaron los demás lesionados son insuficientes para acreditar tal acontecimiento, ya que en su mayoría son documentos privados que no hacen prueba plena. Sigue manifestando, que a mayor abundamiento y con notoria violación a lo establecido por el artículo 30 del Código Penal para el Estado de México, el Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, al fijarle la caución al coacusado ***** no tomó en consideración que si bien es cierto que en el sumario de la causa existen glosadas documentales tendientes a acreditar la reparación del daño causado, las mismas no hacen prueba plena por ser en su mayoría privadas aunado a que únicamente se glosaron comprobantes expedidos a favor de ***** y ***** y no a favor de *****; persona que también resultó lesionada en los hechos motivo de la causa correspondiente y, en ése contexto debió de fijar la caución tomando como base el doble de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mas alto del Estado, así como que en virtud de que las lesiones que sufrieron dichos lesionados fueron causadas por la conducción de un vehículo de transporte de servicio público, como lo es el taxi en que viajaban, tenía la obligación de fijar como monto el triple de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo, dado que en autos, como ya dijo, no existen pruebas específicas respecto a los daños causados y al no hacerlo, su determinación resulta a todas luces arbitraria y contraria a las

constancias de autos, violando el precepto en consulta, otorgándole ventaja indebida al coacusado en comento, sin tomar en consideración el principio de igualdad procesal, que constitucionalmente debe regir en todo proceso. Expone también, que el día ocho de septiembre de dos mil cinco, compareció ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Sultepec, México, para la practica de la audiencia de ofrecimiento de pruebas en la causa ******, la que se llevó a cabo sin la presencia del LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, ya que el mismo, desde la iniciación hasta la conclusión de la misma, siempre permaneció en el interior de su privado, lo que no impidió que se llevara a cabo dicha audiencia ofreciendo las partes las pruebas que estimaron pertinentes, las que fueron acordadas por la Licenciada ******, Secretario del Juzgado, quién a pesar de haber admitido la prueba pericial en materia de hechos de tránsito terrestre y avalúo de daños, a cargo del ******, en el auto correspondiente acuerda: así mismo con relación a los puntos sobre los cuales la defensa solicita versará la pericial admitida dígasele que se le tienen por admitidos el marcado con el numeral I, en sus incisos A, B, C y D, los numerales V, VI, VII y X, haciéndole la aclaración que por lo que respecta a los numerales marcados con el II, III, IV, VIII y IX se entiende que el perito designado tendrá que constituirse para poder peritar en el corralón oficial de tránsito auxiliándose de las declaraciones existentes en la presente causa penal y apoyándose en los lineamientos del reglamento de tránsito para vehículos dentro del Estado de México, por lo tanto dichos numerales son intrascendentes para los efectos de la pericial en comento.

Manifiesta estimar, que la actitud del personal de actuación del Juzgado Mixto de Primera Instancia que ha intervenido en la tramitación de la causa en la que es procesado es arbitraria e indebida, y que los autos dictados a que se ha referido son violatorios de las fracciones V y IX del artículo 20 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 193, 217, 222, 226, 297 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y manifiestamente contraria a las constancias de autos, en virtud de que en aras del principio de seguridad jurídica que es inherente a todo procedimiento judicial del orden penal, el juzgador no tenía porque fijarle al señor ***** por concepto de caución la cantidad de \$ 81,811.94 (ochenta y un mil ochocientos once pesos 94/100 M.N.) como presunto responsable en la comisión de los delitos de lesiones y daño en los bienes, por virtud de que con antelación por el delito de lesiones originado por las mismas causas el juzgador le fijó la cantidad de \$119,980.89 (ciento diecinueve mil novecientos ochenta pesos 89/100 M.N.) en efectivo, dividida en la forma en que lo realizó, ya que cuando le fijó el monto a ***** por los mismos conceptos, subsistía la invariabilidad de motivos por los que fijó a él el monto referido, por lo que no existe razón jurídica alguna para la determinación tomada por el juzgador al respecto, dado que las circunstancias jurídicas y los hechos que motivaron el establecimiento inicial de la garantía continuaban siendo las mismas tanto para el quejoso como para el otro procesado, lo que no tomó en consideración el juzgador, y al fijarle a ***** la cantidad mencionada que difiere con la que se le fijó en \$ 38,168.95 (treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.), transforma la facultad que constitucionalmente le asiste al juzgador para determinar su otorgamiento, en una atribución arbitraria.

Expone también, que de conformidad con lo establecido por el artículo 217 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional está impedido para dar por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia, arte

o materia, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen, se encuentra en posibilidad de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; luego entonces, la función del perito, es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministran argumentos o razones respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente, su función tiene indispensablemente un doble aspecto: a) verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapen a la cultura común de la gente, sus causas y sus efectos; y b) suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del órgano jurisdiccional sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Que en ése contexto de ilustración, se estima que la prueba pericial resulta imperativa cuando surgen cuestiones que por su carácter eminentemente especial, requieren de un diagnóstico respecto de un aspecto concreto o particular que el órgano jurisdiccional ésta impedido para dar por carecer de los conocimientos especiales en determinada ciencia o arte, de manera que, bajo el auxilio que le proporciona tal dictamen, se encuentra en posibilidades de pronunciarse respecto de una cuestión debatida, dando, por cuanto a su particular apreciación, una decisión concreta; y que en ése tenor, en el auto de fecha ocho de septiembre de dos mil cinco, el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Sultepec, México, en la causa marcada con el número 107/05, ilegalmente decreta intrascendentes los planteamientos efectuados en los numerales II, III, IV, VIII y IX del escrito de fecha ocho de septiembre de dos mil cinco, mediante el cual, efectuó el ofrecimiento de pruebas respectivo, impidiendo con ello que se le proporcionen al perito

designado en materia de hechos de tránsito terrestre y avalúo de daños, todos y cada uno de los elementos necesarios para que esté en posibilidad de emitir su dictamen ya que necesariamente, dicho perito para determinar las causas que originaron el accidente motivo de la causa y determinar el monto de los daños, debe tener a la vista tanto los vehículos colisionados en el mismo, como el lugar en que aconteció para estar en aptitud de determinar, mediante la observación tanto de dicho lugar como de la magnitud de los daños causados, la mecánica que dio lugar a la colisión así como la velocidad en que circulaban los vehículos implicados; dicho en otras palabras: el perito debe de practicar todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte le sugiera, expresando hechos y circunstancias, habrá de entenderse que el experto tiene la obligación, al emitir su dictamen, de llevar a cabo los que sean necesarios de acuerdo a la ciencia que maneje, es decir, no basta que se apoye sólo en su experiencia profesional, sino que debe hacer uso de los medios científicos que estén a su alcance, para que así genere convicción en el juzgador; sentado lo anterior manifiesta que en el proveído impugnado, es patente la actitud del Juzgador de impedir que el perito cuente con todos los medios que se han descrito en líneas precedentes y que se estiman pertinentes para la integración correcta del dictamen a emitir, toda vez que al decretar intrascendentes los numerales mencionados, para los efectos de la pericial en comento, por el hecho de que según el Juzgado de referencia: se entiende que el perito designado tendrá que constituirse para poder peritar en el corralón oficial de tránsito auxiliándose de las declaraciones existentes en la presente causa penal y apoyándose en los lineamientos del reglamento de tránsito de vehículos dentro del Estado de México, no toma en consideración que independientemente de los elementos que, de acuerdo a su criterio, deben tenerse por entendidos, el quejoso expone, en el cuestionamiento efectuado en números romanos, que el perito tomando en consideración tales elementos deberá de realizar

cuidadosa verificación de daños y trayectorias deformantes de los vehículos involucrados en el presente hecho, haciendo notar Intensidades de Daños y sobre todo trayectorias deformantes; con auxilio de las declaraciones existentes, tanto de participantes como de testigos presenciales el perito establecerá la forma en que circulaban los vehículos previa al hecho, así como descripción del Instante de la Colisión o Dinámica del Hecho, las causas que dieron origen al accidente y que el perito deberá abundar en todo lo que considere de interés en el presente hecho y que de luz a la Parte Juzgadora para su mejor intervención y al no tomar en consideración lo asentado emite un proveído por demás arbitrario y notoriamente contrario a las constancias de autos obrando indebidamente y no por simple opinión de error, ya que con ello le proporciona ventaja indebida al coacusado Juan Rojas Hernández, por constreñirlo a ajustar su defensa a su arbitrio y capricho, obstaculizándolo para demostrar su inculpabilidad de los hechos que se le imputan, coartando con ello su derecho de que se le reciban todos los medios de convicción que estimó debe ofrecer para su adecuada defensa, a la vez que al desechar las cuestiones planteadas en los numerales mencionados, no cumple con su obligación de facilitar todos los datos necesarios que constan en el proceso al perito nombrado para la defensa debida, sin que funde y motive su determinación ya que se concreta a desechar su pedimento sin apoyarse en ningún razonamiento lógico jurídico ni mucho menos en un precepto legal que se ajuste al caso concreto a efecto de hacer una exacta aplicación de la ley penal, ya que no existe precepto legal alguno que lo autorice a desechar los cuestionamientos que planteó al ofertar la pericial, de donde resulta patente la realización de un hecho arbitrario e indebido por parte del Juzgado mencionado.

Por su parte el **LICENCIADO DAVID GUADRRAMA CELAYA**, hizo valer lo que a su interés convino a través del

informe de ley, presentado en las oficinas que ocupa esta contraloría en fecha cinco de abril del año en curso, el que se tiene por reproducido en éste apartado, como si a la letra se insertase para los efectos legales conducentes.-----

IV.- Ahora bien, es pertinente puntualizar que el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado de México, a la letra dice:

“Artículo 119. Toda denuncia o acta levantada en contra de algún servidor público del Poder Judicial, se presentará ante la Dirección de la Contraloría Interna o su delegación correspondiente, la que dará cuenta dentro del término de 24 horas al presidente del Consejo de la Judicatura, quién designará a alguno de su miembros como Instructor, para que se encargue de la sustanciación del expediente respectivo, pudiendo auxiliarse, en su caso, de la Contraloría Interna. El procedimiento se instruirá en los términos siguientes:

I Se iniciará con la denuncia o acta en la que se ofrecerán las pruebas respectivas;“

De una correcta interpretación del anterior precepto legal, se deduce que para demostrar la responsabilidad del servidor público al que se denuncia, la obligación de aportar las pruebas necesarias recae en el denunciante.

En el presente caso, dicho denunciante ***** , únicamente acompañó a su escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil cinco, copias simples de: el auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil cinco, del recibo oficial número 291232, del auto de fecha veinticinco de agosto del mismo año, de un escrito fechado el veinticinco de agosto del año próximo pasado, suscrito por el Licenciado ***** , otro auto de la misma fecha veinticinco de agosto de dos mil cinco y de una audiencia de ofrecimiento de pruebas llevada a cabo el día ocho de septiembre

de dos mil cinco. Documentales que fueron debidamente admitidas por acuerdo de fecha siete de abril de dos mil seis y desahogadas en la audiencia que prescribe el artículo 119 fracción III de la Ley Orgánica en consulta de fecha veintiocho de abril del año que corre. Sin embargo, no es dable concederle valor probatorio alguno a dichas documentales por lo siguiente: Los artículos 57 y 61 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, legislación aplicable al presente procedimiento, atento a lo establecido por el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ambos ordenamientos vigentes en la Entidad, a la letra dicen:

“Artículo 57. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por ley, dentro de los límites de sus facultades, a las personas dotadas de fe pública y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en contrario.”

“Artículo 61. La presentación de documentos públicos podrá hacerse con copia simple o fotostática, si el interesado manifestare que carece del original o copia certificada, pero no producirá aquélla ningún efecto si antes del dictado de la resolución respectiva no se exhibiere el documento con los requisitos necesarios para que haga fe en el expediente correspondiente.”

Observándose de autos, que el denunciante en ningún momento realiza manifestación de carecer del original o copia certificada y mucho menos existe constancia hasta de la fecha de haber exhibido dichas documentales con los requisitos necesarios, por lo cual no es dable como se ha indicado y con apoyo en el

artículo 96 del Código de procedimientos Administrativos en cita, otorgar valor probatorio alguno a dicha documentales.

Por otra parte, es pertinente dejar establecido que el Consejo de la Judicatura es el órgano competente para dilucidar los aspectos relativos a la responsabilidad de los integrantes del Poder Judicial de la Entidad, y dentro de sus facultades también se encuentra la de velar por la autonomía e independencia de los miembros de éste poder, lo que debe entenderse como la facultad de los órganos jurisdiccionales para interpretar y decidir al emitir sus fallos, de acuerdo con el criterio que estimen aplicable, siempre y cuando no sea contrario a derecho. Una de las cuestiones que evidencia la autonomía e independencia de los miembros de los órganos jurisdiccionales, estriba en su libertad para aplicar el derecho, sin que medien cuestiones externas que afecten su imparcialidad, en cuyo caso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio jurisprudencial en el sentido de que la queja administrativa tiene como finalidad analizar cuestiones de responsabilidad de servidores públicos por incurrir en alguna de las hipótesis contenidas en la ley, pero de ninguna manera puede analizar criterios jurisdiccionales, a menos de que se trate de ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad, o, de alguno de los supuestos marcados en la ley respectiva como causa de responsabilidad. Este criterio es consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Mayo de 1991, tesis: P/J 15/91, página 26, que dice:

QUEJA ADMINISTRATIVA. VERSA SOBRE IRREGULARIDADES ATRIBUIDAS A FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y NO SOBRE CRITERIOS JURIDICOS.

La llamada "queja administrativa" cuya existencia se deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene como propósito que el Pleno de la Suprema Corte conozca y decida si la conducta de magistrados y jueces es correcta, por lo que esa instancia debe circunscribirse al examen de conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad en la actuación de los funcionarios judiciales. Por consiguiente, en dicha instancia no pueden examinarse de nueva cuenta, para efectos jurisdiccionales, los problemas jurídicos controvertidos en un caso concreto para determinar si la Suprema Corte comparte el criterio jurídico sustentado o si existe alguna irregularidad técnica en una sentencia que, en muchos casos, tiene el carácter de ejecutoria.

Queja administrativa 23/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 5 de diciembre de 1989. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente Del Río Rodríguez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro.

Queja administrativa 32/89. José V. Soto Ramírez y otro. 20 de febrero de 1990. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, González Martínez, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente Del Río Rodríguez. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.

Queja administrativa 33/89. José de Jesús Martínez Sánchez. 20 de febrero de 1990. Unanimidad de veintiún votos de los señores ministros De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente Del Río Rodríguez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro.

Queja administrativa 55/90. Shi Yiu Cheung. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa.

Queja administrativa 30/90. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 10 de abril de 1991. Unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros: Magaña Cárdenas, Rocha Díaz, Azuela Güitrón, Alba Leyva, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Llanos Duarte, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Díaz Romero, Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez. Ausentes: Adato Green y De Silva Nava. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla.

Tesis de Jurisprudencia 15/91 aprobada por el Tribunal en Pleno en sesión privada celebrada el martes siete de mayo de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de veinte votos de los señores ministros: Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña Cárdenas, Salvador Rocha Díaz, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Santiago Rodríguez Roldán, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Noé Castañón León.

APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO VII. MAYO 1991. PLENO.
PAG. 26.

APENDICE. GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. No. 41. MAYO 1991. PAG. 19.
J_E0008P_000575

En la especie, lo esencialmente argumentado por el denunciante, fue que el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, en la causa penal número ***** , le fijó al señor ***** por concepto de caución la cantidad de \$ 81,811.94 (ochenta y un mil ochocientos once pesos 94/100 M.N.) como presunto responsable en la comisión de los delitos de lesiones y daño en los bienes, por virtud de que con antelación por el delito de lesiones originado por las mismas causas el juzgador le fijó al denunciante la cantidad de \$119,980.89 (ciento diecinueve mil novecientos ochenta pesos 89/100 M.N.) en efectivo, dividida en la forma en que lo realizó, y que cuando le fijó el monto a ***** por los mismos conceptos, subsistía la invariabilidad de motivos por los que fijó a él el monto referido, por lo que no existe razón jurídica alguna para la determinación tomada por el juzgador al respecto, dado que las circunstancias jurídicas y los hechos que motivaron el establecimiento inicial de la garantía continuaban siendo las mismas tanto para el quejoso como para el otro procesado, lo que no tomó en consideración el juzgador, y al fijarle a ***** la cantidad mencionada que difiere con la que a él se le fijó en \$ 38,168.95 (treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.), lo que transforma la facultad que constitucionalmente le asiste al juzgador para determinar su otorgamiento, en una atribución arbitraria. Al respecto debe decirse,

que no obstante que el denunciante ninguna prueba aportó para sustentar tal aseveración, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en su artículo 324, otorga la facultad al Órgano Jurisdiccional de fijar el monto de la caución que garantice la libertad provisional del inculpado, tomando en consideración las circunstancias que en el mismo se mencionan; y en cuyo caso, si las inconformidades del denunciante implican cuestiones de eventual ilegalidad de dos acuerdos, de ninguna forma pueden constituir causa de responsabilidad administrativa, pues de estimarse así, se atentaría contra lo dispuesto por el artículo 63 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado, ya que la queja administrativa se instituyó con el propósito de conocer y decidir si la conducta de los funcionarios del Poder Judicial de la Entidad, ha sido correcta o no, limitándose al análisis de aquellas conductas que pudieran implicar responsabilidad, siempre y cuando estén previstas como causas específicas en dicha ley, o en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, sin que le sea permitido el estudio de legalidad de actuaciones y de criterios jurídicos empleados en la emisión de alguna determinación; en el caso en estudio, el LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, fijó el monto de la caución a los ***** y ***** , en uso de la función jurisdiccional que le ha sido encomendada, invocando los fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, sobre los cuales éste Consejo ésta impedido para pronunciarse.

Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Tesis P/J, 15/90, página 85, cuyo rubro y texto es el siguiente:

QUEJA ADMINISTRATIVA. NO ES UN RECURSO POR VIRTUD DEL CUAL SE ESTUDIE, ANALICE Y RESUELVA SOBRE LA LEGALIDAD DE UNA RESOLUCION.

Del contenido de la queja sólo deben tomarse en consideración los hechos que aludan a la comisión de una pretendida falta en el despacho de los negocios a cargo de un funcionario judicial. De ahí que, por regla general, no es procedente analizar los fundamentos de una resolución, ni menos pronunciarse al respecto, pues ello equivaldría a tratar la queja como si fuera un recurso, lo cual carece de fundamento legal.

Queja Administrativa 22/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de 19 votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente Del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León y Rocha Díaz. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G.

Queja Administrativa 12/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 24 de enero de 1990. Unanimidad de 20 votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente Del Río Rodríguez. Ausente: Castañón León. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez-Mellado G.

Queja Administrativa 18/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 24 de enero de 1990. Unanimidad de 20 votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente Del Río Rodríguez. Ausente: Castañón León. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez-Mellado G.

Queja Administrativa 10/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de 19 votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente Del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León y Rocha Díaz. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez-Mellado G.

Queja Administrativa 11/89. Instituto Mexicano del Seguro Social. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de 19 votos de los señores ministros: De Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green de Ibarra, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez y presidente Del Río Rodríguez. Ausentes: Castañón León y Rocha Díaz. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez-Mellado G.

Tesis de jurisprudencia número 15/1990, aprobada por el Tribunal en Pleno en Sesión Privada, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre próximo pasado, por unanimidad de 15 votos de los señores ministros: presidente Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Mariano Azuela Güitrón, Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos Duarte, José Martínez Delgado, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero y Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: Salvador Rocha Díaz, Victoria Adato Green, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras, Santiago Rodríguez Roldán y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa.

APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO VI. JULIO-DICIEMBRE 1990. PRIMERA PARTE. PLENO. PAG. 85.

APENDICE. GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. No. 35. NOVIEMBRE 1990. PAG. 20.
J_E0008P_000564

Por otra parte, respecto de la inconformidad del ******, en el sentido de que en la audiencia de ofrecimiento de pruebas llevada a cabo en la causa ******, en fecha ocho de septiembre de dos mil cinco, el Juez denunciado no presidió la mencionada audiencia y los acuerdos fueron dictados en la misma por la Secretario de Acuerdos LICENCIADA ******, y como consecuencia se le dejó de admitir en los términos ofrecidos la prueba pericial en materia de hechos de tránsito terrestre y avalúo de daños; como ha quedado acotado ninguna prueba aportó para sustentar tales asertos; y en todo caso lo referente a la inadmisión de los planteamientos señalados en los numerales II, III, IV, VIII y IX de la prueba pericial en comento, son cuestiones de carácter jurisdiccional susceptibles de combatirse a través de los medios procesales de impugnación que prevé la ley de la materia, pues como se ha manifestado con antelación fueron dictados por el Juez de los autos en uso de la función jurisdiccional que le ha sido conferido.

Bajo tales consideraciones, no se advierte que en el caso en estudio se revelen causas de ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna irregularidad notoria, que pudiera dar origen al fincamiento de responsabilidad administrativa a cargo del titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México, LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA.

Por lo anterior, válidamente se puede concluir que el LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, no incurre en responsabilidad administrativa; por tanto, con apoyo en lo establecido por el artículo 121 de la ley Orgánica del Poder Judicial

vigente en la Entidad, se declara la no responsabilidad administrativa del LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, en su carácter de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, dascrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México.

Publíquese un extracto de la presente en el Boletín Judicial.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:- - - - -

PRIMERO.- Se declara la no responsabilidad administrativa del LICENCIADO DAVID GUADARRAMA CELAYA, en su carácter de Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de México, dascrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, México.

Publíquese un extracto de la presente en el Boletín Judicial.

SEGUNDO.- Comuníquese ésta resolución al precitado servidor judicial por los conductos legales y háganse las anotaciones del caso en su expediente personal.- - - - -

TERCERO.- Notifíquese la presente al denunciante

*****, en el domicilio sito en Domicilio conocido,

*****, para lo cual se faculta a un fedatario del Juzgado de Cuantía Menor de Sultepec, México. - - - - -

CUARTO.- En su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido.- - - - -

A S I, LO RESOLVIO EL PLENO DEL CONSEJO DE LA

**JUDICATURA DEL ESTADO DE MEXICO, POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DE SUS INTEGRANTES, QUIENES FIRMAN ANTE EL
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS LICENCIADO
***** , SIENDO PONENTE LA LICENCIADA
***** .**